

Ayotzinapa y la crisis del Estado mexicano: un espacio de reflexión colectiva ante la emergencia nacional



telemundo.com

Dra. María Teresa Sierra

Profesora investigadora del CIESAS-DF
mtsierrac@hotmail.com

Dra. Rachel Sieder

Profesora investigadora del CIESAS-DF
rachel.sieder@ciesas.edu.mx

Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre han sacudido a la sociedad mexicana. Continúa la controversia sobre qué sucedió realmente aquella noche en que seis estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron asesinados por las fuerzas policiacas, y otros 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada. Aunque los antropólogos forenses han identificado los restos de Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos, entre los huesos recogidos de un basurero en el municipio de Cocula, queda un infinito número de preguntas todavía sin respuesta y hallar a los responsables de este crimen de Estado. Las dignas demandas de los padres de los normalistas reclamando verdad y justicia han encontrado eco en la sociedad mexicana, llevando a una movilización social sin precedentes y a una crisis de legitimidad aguda del gobierno de Enrique Peña Nieto y del sistema político mexicano en su conjunto. La sociedad no solo exige un alto a la violencia, sino el fin de la impunidad y la corrupción enquistadas en los partidos políticos y el aparato del Estado, lo cual es la otra cara de la moneda de la violencia que ha sacrificado a decenas de miles de jóvenes pobres del país, cuya tortura, desaparición forzada y asesinato extrajudicial hasta ahora había sido “normalizado” porque se les atribuían vínculos con el crimen organizado. Como se decía de los desaparecidos en la guerra sucia de Argentina, “algo habrán hecho”, y con eso se justificaba o callaba crímenes de lesa humanidad.

Ayotzinapa duele por la vileza del crimen cometido, porque a casi tres meses de lo sucedido aún no sabemos qué pasó con los estudiantes, ni los motivos de estos lamentables hechos, y porque ha destapado una grieta profunda de muchas otras desapariciones y crímenes extrajudiciales acaecidos en Guerrero y en muchos otros estados del país. Estamos ante crímenes abominables que responden a un patrón similar donde prevalece la profunda corrupción del poder político en colusión con el crimen organizado, propiciando lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos en su Capítulo México (Sentencia, 12 al 15 de noviembre de 2014) ha llamado de manera contundente: “desvío de poder”.

Ayotzinapa nos muestra también la fuerza de la sociedad civil organizada en Guerrero, que involucra a familiares y comunidades cercanas a los estudiantes, acompañados por defensores de derechos humanos, quienes con gran dignidad han sabido mantenerse en su demanda de justicia, demanda que nos interpela a todos. La respuesta nacional e internacional a los terribles acontecimientos

afortunadamente hace evidente que como sociedad estamos vivos y que debemos exigir verdad y justicia para no permitir la repetición de estos lamentables hechos.

Indudablemente, Ayotzinapa es un parteaguas y México no será el mismo después de esto. Las explicaciones oficiales emitidas hasta la fecha han sido insuficientes: su credibilidad ha sido duramente cuestionada por la prensa nacional e internacional, grupos de la sociedad civil, y distintas entidades académicas públicas y privadas, incluyendo estudios científicos de investigadores de la UNAM y la UAM que discuten las verdades construidas sobre el basurero de Cocula donde supuestamente habrían matado e incinerado a los estudiantes. Urgen medidas para enfrentar y parar la impunidad, pero todavía no se vislumbran. Mientras tanto, las agresiones reportadas contra los padres de los normalistas en Chilpancingo, Guerrero, por parte de miembros de la Policía Federal en diciembre, y las amenazas a defensores de derechos humanos como los abogados de Tlachinollan —que han acompañado muy de cerca a los padres de familia en su demanda de justicia— apuntan a una alarmante agudización del enfrentamiento social y a un recrudescimiento de la represión estatal.

Además de manifestar nuestra solidaridad con los familiares de los normalistas, y nuestra indignación como ciudadanos frente a los terribles hechos ocurridos, como académicos tenemos una responsabilidad especial para contribuir al análisis de las causas de la violencia y la problemática generalizada, y de proponer medidas y recomendaciones que nos ayuden a salir de esta encrucijada. En meses pasados se han organizado foros de discusión y análisis sobre Ayotzinapa en las distintas sedes del CIESAS, y este número del *Ichan* se dedica a presentar algunos de estos debates. En la Casa Chata, una de las sedes del CIESAS en el Distrito Federal, el 27 de noviembre tuvo lugar un foro organizado colectivamente por académicos de la institución donde expusieron María Teresa Sierra, María Bertely, Aída Hernández, Séverine Durin, Mariana Mora, Carlos Flores y Alberto Aziz. Las colegas Mariana Mora, Aída Hernández y María Teresa Sierra han trabajado por varios años en Guerrero, y aquí ofrecen una mirada desde sus distintas trayectorias y conocimientos con el afán de analizar la crisis de derechos humanos que se vive en el estado así como algunas de las respuestas que se gestan desde las propias

organizaciones sociales. En su contribución Mariana Mora destaca tres dimensiones importantes para comprender las formas de la violencia, la inseguridad y la criminalización de la pobreza en la montaña de Guerrero: la construcción colectiva de los agravios; la tensión entre política de seguridad y política de desarrollo, tensión que crea el Estado neoliberal y que sacrifica a una generación de jóvenes, y el papel de la investigación antropológica comprometida en estos escenarios tan complejos. Aída Hernández apunta al telón de fondo de impunidad y violencia militar que ha determinado el *continuum* de violencias de larga data en el estado. María Teresa Sierra, en su análisis, muestra que Ayotzinapa no sólo revela una política de muerte y violencia sino también la fuerza organizativa de los pueblos para generar alternativas y respuestas a la violencia y la inseguridad. Es en este contexto donde resulta pertinente la referencia a las policías comunitarias y ciudadanas, como actores que gozan de gran legitimidad y que ponen en evidencia al Estado y el fracaso de sus políticas de seguridad pública. María Bertely nos aporta una historia de las escuelas normales rurales, imprescindible para entender la criminalización actual de su protesta y la represión abierta que han sufrido en Guerrero desde 2011. Mario Chávez y Marcela San Giacomo también analizan las escuelas normales rurales, desde lo que llaman un “punto de diversidad lingüística y cultural”. Las contribuciones de Séverine Durin y Efrén Sandoval del CIESAS-Noreste, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos recuerdan la encrucijada de derechos humanos que se vive en el norte del país; no es solo Guerrero, y por eso el lema de “Todos somos Ayotzinapa” ha tenido tanta resonancia, porque se refiere a un patrón de impunidad generalizada en todo el país. Elena Azaola nos comparte las desoladoras historias de adolescentes reclusos, cuyo involucramiento con el crimen organizado comienza con historias de abuso y abandono de todo tipo. La contribución del politólogo Alberto Aziz apunta a distintas aristas del trance actual del Estado, y algunas de las mínimas medidas necesarias para corregir su rumbo. Esperemos que este número del *Ichan* sirva como aliento para redoblar nuestros esfuerzos colectivos para el análisis crítico y propositivo, y que juntos contribuyamos a transformar lo que María Mora llama “la política de la muerte” en una política de vida futura para el país.